

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Benjamín Aníbal de Jesús Martínez Villa
DEMANDADAS	Colpensiones
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 016 2015 00052 01
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo conexo
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	060 de 2021

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuunos (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la parte ejecutante contra la decisión del 28 de mayo de 2020 que niega medida cautelar de embargo.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante escrito del 24 de enero de 2019¹, la parte ejecutante solicitó embargo de los dineros contenidos en la cuenta de ahorros a nombre de Colpensiones No.65283206810, afirmando que está habilitada para aplicar embargos conforme a la certificación que anexa.

En auto del 9 de abril de 2019², se ordenó oficiar a Colpensiones para que certifique la inembargabilidad de los recursos de la seguridad social, conforme al artículo 37 párrafo único de la Ley 1873 de 2007, artículo 63 de la Constitución Política, 134 de la Ley 100 de 1993 y 25 de la Ley 1751 de 2015.

La representante legal suplente de Colpensiones dio respuesta³ citando las normas anteriores, así como los artículos 48 de la Constitución Política, 594 del CGP, la Circular No. 22 del 8 de abril de 2010 de la Procuraduría General de la Nación y la Circular 2012 IE42061 del 13 de julio de 2012 de la Contraloría General de la Republica. Indicó:

“Certifico que los recursos administrados por Colpensiones en las cuentas de Ahorros y Corriente aperturadas en las diferentes entidades bancarias, hacen parte de los recursos del Sistema General de Pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y por lo tanto son de naturaleza inembargable”

En memorial del 12 de junio de 2019⁴, la parte ejecutante reiteró la solicitud de embargo de los dineros contenidos en la cuenta de ahorros a nombre de Colpensiones No.65283206810, y agregó la cuenta No. 65283208570.

En auto del 28 de mayo de 2020⁵ se negó la medida cautelar de embargo, indicando el A que, conforme a la respuesta de Colpensiones, los recursos administrados por esta en cada una de las cuentas de ahorros y corrientes en las entidades bancarias, hacen

¹ Fl.300-301

² Fl. 305

³ Fl.307

⁴ Fl.308

⁵ Fl. 312

parte de los recursos del Sistema General de pensiones, por lo que son de naturaleza inembargable.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación⁶, indicando que la Corte constitucional ha establecido que el principio de inembargabilidad no puede ser absoluto, encontrando excepción cuando se trata de derechos fundamentales de los pensionados como son la seguridad social, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, debido proceso y necesidad de asegurar la vigencia de un orden justo, como en este caso donde se solicita una acreencia de carácter pensional. Cita las sentencias C-378 de 1998, STL 18606 del 14 de diciembre de 2016, concluyendo que no existe duda sobre el carácter de derecho pensional que se reclama. Solicita se revoque el auto.

En auto del 17 de septiembre de 2020 se retiró lo argumentando en el auto atacado, no se repuso la decisión y se concedió el recurso de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar si frente a las cuentas bancarias denunciadas por la parte actora, resulta procedente decretar la medida cautelar de embargo, en la forma solicitado por la parte ejecutante.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

⁶ Fl. 314-315

Sea lo primero indicar que la demanda ejecutiva fue presentado por la diferencia en la liquidación de los intereses moratorios, costas del ordinario e intereses legales⁷. En auto del 25 de agosto de 2016⁸, se libró mandamiento de pago por i) \$169.947.257 por diferencia en intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Y ii) \$5.356.000 por costas del proceso ordinarios, más los intereses legales.

En auto del 4 de diciembre de 2017⁹, se ordenó seguir adelante la ejecución por \$169.947.257 por diferencia en intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y por los intereses legales sobre las costas del proceso ordinario. Dado lo anterior, el recurso de apelación no prosperará por los siguientes argumentos:

Primero. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, son inembargables: **1)** Los recursos de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. **2)** Los recursos de los Fondos de Reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y sus respectivas reservas. **3)** Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y sus respectivos rendimientos. **4)** Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. **5)** Las pensiones y demás prestaciones que reconoce la Ley 100, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **6)** Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la misma Ley. Y **7)** Los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional.

El artículo 48 de nuestra Carta Política le reconoce a la seguridad social la doble condición de derecho irrenunciable y de servicio público de carácter obligatorio prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Y para asegurar estándares mínimos en la realización de tal derecho, prevé que los recursos de las

⁷ Fl.211

⁸ Fl. 243-244

⁹ Fl. 276-277

instituciones de la Seguridad Social no se pueden destinar ni utilizar para fines diferentes al mismo.

Teniendo en cuenta este mandato, la jurisprudencia ha reconocido de manera uniforme y pacífica que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en salud como en pensiones, con independencia de la denominación que de ellos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.), no pueden ser utilizados para propósitos distintos a los relacionados con la seguridad social dada su naturaleza parafiscal.

Al referirse al alcance de la norma citada, la Corte Constitucional ha explicado:

“(…)

“Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud (C-577/97, C-542/98, T-569/99, C-1707/00) como en pensiones (C-179/97), llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (C-086/02, C-789/02)”¹⁰.

“De esta manera, es claro que los recursos destinados a la seguridad social, ya sea que provengan de aportes directos de los empleadores, de los trabajadores, del Estado o de cualquier otro actor del sistema, tienen necesariamente destinación específica. Lo anterior, como ya lo ha explicado la jurisprudencia de esta Corporación, no significa que los fondos de la seguridad social deban reinvertirse de manera individual en quien efectuó el aporte, puesto que “la destinación específica de los recursos de que se habla debe entenderse de manera global como la necesidad de invertirlos nuevamente en el sistema, en beneficio de todos aquellos que se favorecen de él”¹¹. (Sentencia C-895 de 2 de diciembre de 2009)

Sobre la naturaleza jurídica de los recursos del Sistema General de Pensiones, también se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

¹⁰ Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2004.

¹¹ Corte Constitucional, Sentencia C-1002 de 2004. En el mismo sentido ver la Sentencia C-349 de 2004.

“Los recursos para el pago de las prestaciones que se originan en el Sistema General de Pensiones son de carácter parafiscal como lo ha enseñado la doctrina.

“Uno de los elementos esenciales de la parafiscalidad es la de que esta clase de recursos constituyen un patrimonio de afectación, esto es, que los bienes que lo integran han de destinarse a la finalidad que la ley les señala en el momento de su creación; así, los fondos constituidos con las cotizaciones o los aportes que efectúan por mandato de la ley, el Estado o los particulares, a cualquiera de los regímenes de pensiones, han de consagrarse exclusivamente a pagar las prestaciones del servicio de la seguridad social en pensiones, como lo determina el artículo 283 de Ley 100 de 1993.

“De los patrimonios de afectación no puede predicarse propiedad –solo antitécnicamente- por cuanto nadie puede ejercer el poder de libre disposición sobre ellos. Por esta razón es que las normas de la Ley 100 de 1993 que regulan el Fondo de Solidaridad Pensional (artículo 25) o el régimen de prima media con prestación definida, (artículo 52) o el de ahorro individual con solidaridad (artículo 90), sólo les otorga el carácter de administradoras a las entidades a las que se les confía la gestión de los recursos.

“Así entonces, el fondo económico del que proviene el pago de las pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes aunque esté radicado en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, no es propiedad suya, sino que éste es sólo administrador de aquellos.

“La Constitución Nacional señala las entidades que contribuyen a conformar el Tesoro Público: la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, dentro de las que está comprendido el Instituto de Seguros Sociales, por su carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, e integran el tesoro con los bienes y valores que sean propios de cada una de ellas; como las reservas pensionales con las que el Instituto cubre el valor de la pensión de vejez, no son de su propiedad, sino que son sólo administradas por él, no hacen parte del Tesoro Público.” (Sentencia de 27 de febrero de 2003, Radicado 19.508)

Aunado a lo anterior, el artículo 594 del Código General del Proceso, establece:

“Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social...”

Segundo. En este juicio se pretende ejecutar el pago de \$169.947.257, por diferencia en intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más los intereses legales sobre las costas del proceso ejecutivo. Ahora, la jurisprudencia a que hace alusión el apelante - en virtud de la cual, se ha excepcionado la regla de

inembargabilidad mencionada, se refiere a supuestos de hecho en los cuales: **i)** No se han satisfecho acreencias de la seguridad social como mesadas pensionales. Y **ii)** Ha sido necesario proteger la afectación del mínimo vital del interesado. En este caso, no se presenta ninguna de las dos circunstancias anteriores, porque:

a) Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, constituyen una sanción por el retardo en el pago de la prestación debida y poseen un carácter indemnizatorio. Al respecto la Corte Constitucional lo explicó en la sentencia C- 601 de 2000:

“(...) para la Corte es evidente que desde el punto de vista constitucional, las entidades de seguridad social están obligadas a indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas que se les adeudan, pues el artículo 53 de la Carta es imperativo y contundente al disponer que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones. En este sentido, el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desarrolló cabalmente este mandato superior, pues, la obligación de pagar oportunamente las pensiones y de asumir, en caso de no hacerlo, un interés de mora que consulte la real situación de la economía, es una consecuencia del artículo superior referido, en la parte concerniente a pensiones legales en conexidad con el artículo 25 ibídem, que contempla una especial protección para el trabajo. En este sentido también es oportuno precisar que tal indemnización a los titulares de las pensiones por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas debe aplicárseles a los regímenes especiales anteriores y subsistentes con la ley 100 de 1993, esto es, los que se encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la referida ley”.

b) No se advierte vulneración o amenaza al mínimo vital del ejecutante con la omisión del pago de los conceptos frente a los cuales se ordenó seguir adelante la ejecución, pues este percibe la pensión de vejez desde el 31 de diciembre de 2006 según resolución 31551 de 2006, y además, mediante resolución GNR 315102 del 9 de septiembre de 2014 se dio cumplimiento a la sentencia que ordenó el pago de retroactivo pensional y reajuste de la pensión de vejez entre otros¹².

En ese orden de ideas, si bien es cierto la demandada ha sido negligente en el pago de las acreencias reclamadas y por tal razón cursa el proceso ejecutivo, también lo es que, no está jurídicamente permitido desconocer la regla de inembargabilidad de los

¹² Fl. 221-223

recursos pertenecientes a la Seguridad Social, por fuera de las excepciones que las Altas Cortes han admitido en casos particulares.

Dado lo anterior, y sin ser necesarias más consideraciones sobre el particular, se **CONFIRMARÁ** íntegramente la decisión.

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, por resultar vencida con su recurso de alzada. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$908.526 en favor de la entidad ejecutada.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por el apoderado de la parte ejecutante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, por resultar vencida con su recurso de alzada. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$908.526 en favor de la entidad ejecutada.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 62 del 15 de Abril de 2021

consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

e67a9a6a825c9c036e3974f3dd8fd70814867e960302a82c5c73c0e420012727

Documento generado en 14/04/2021 02:52:04 PM